

La capacitación como estrategia para el mejoramiento de las oportunidades de sobrevivencia de las mujeres. Un estudio de caso en Mendoza, Argentina

Molina, Mercedes*

Resumen

El presente artículo se propone contribuir a dilucidar en qué medida se han modificado las condiciones de vida de las poblaciones escolarizadas, luego de haber completado el nivel medio. Es decir, dado que la falta de capacitación –que inicialmente, y desde la discursividad oficial dominante, era considerada la causa por la cual estas poblaciones de mujeres sólo podían acceder a puestos de trabajo altamente precarizados– se ha revertido, se busca conocer si en el presente, esas personas se insertan en el mercado laboral en posiciones que les hayan permitido superar la antigua condición de pobreza.

Palabras clave: capacitación, pobreza, sobrevivencia, mujeres, Argentina.

Training as a Strategy for Improving Survival Opportunities for Women. A Case Study in Mendoza, Argentina

Abstract

This article proposes to elucidate the degree to which living conditions for schooled populations have changed after completing high school. Given that the lack of training, which initially and according to officially dominant discourse was considered the reason these populations of women could access only highly precarious jobs, has been reversed, this study seeks to discover whether those people have entered the labor market today in positions that have allowed them to overcome old conditions of poverty.

Key words: training, poverty, survival, women, Argentina.

* Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO, Buenos Aires, 2009). Magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación (FLACSO, Buenos Aires, 2007). Licenciada en Sociología (Universidad Nacional de Cuyo, 2002). Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Mendoza, Argentina. Docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Apartado postal: Casilla de Correo 131 (Mendoza, Argentina). (CONICET-Mendoza). Correo electrónico: mmolina@mendoza-conicet.gob.ar

Introducción

La sociedad argentina ha sufrido, durante las últimas tres décadas, un sostenido proceso de apertura económica y desmantelamiento del sistema de producción industrial, cuya consecuencia ha sido el empobrecimiento de millones de familias a lo largo y ancho del país. Ello trajo aparejada una profunda crisis social, que alcanzó su máximo dramatismo en los acontecimientos de diciembre de 2001, cuando miles de ciudadanos se volcaron a las calles a reclamar por un cambio drástico de las formas de organización políticas y económicas.

Entre las políticas sociales implementadas durante la década de 2000, con vistas a paliar momentáneamente la pobreza y revertir sus efectos a largo plazo, se destaca la promoción de la escolarización secundaria de personas adultas. El supuesto sobre el cual reposa este tipo de intervenciones sostiene que ciertos grupos sociales, entre ellas las mujeres, tienen dificultades para insertarse en el mercado de trabajo debido a su falta de capacitación. Por esa razón, comenzó a promoverse que las jefas de familia desocupadas se reintertaran en el sistema educativo por medio de becas o pequeños subsidios mensuales, bajo la forma de programas de ingreso mínimo. Pero además, muchas otras mujeres volvieron a las aulas de nivel medio, sin estar becadas o subsidiadas, con el solo objetivo de continuar su formación y obtener la titulación secundaria para poder acceder a mejores empleos.

En términos conceptuales, la categoría de “estrategias de obtención de medios de sobrevivencia” pareció adecuada para obtener información no sólo de los modos de participación en el mercado de trabajo y las retribuciones salariales obtenidas por esa vía, sino también de los mecanismos por los cuales se

obtienen otros recursos que aumentan las disponibilidades y mejoran, por ende, las condiciones de vida de cada uno de los grupos familiares en los que las mujeres se insertan.

Las estrategias de obtención de medios de sobrevivencia se definen como todos aquellos mecanismos desplegados para conseguir recursos, monetarios o no monetarios, destinados a la satisfacción de las necesidades materiales del grupo familiar o conviviente (Bourdieu, 2002).

La investigación se llevó a cabo con una metodología cualitativa, procurando reconstruir no solamente los comportamientos o prácticas sociales que constituyen estrategias de obtención de medios de sobrevivencia del grupo poblacional elegido, sino también, las representaciones que se encuentran asociadas a ellos. Las técnicas de recolección de datos han sido entrevistas en profundidad y observaciones tanto participantes como no participantes, realizadas en los barrios de residencia propios de las mujeres entrevistadas. Se trabajó con una muestra cualitativa integrada por mujeres mendocinas de sectores populares, que hubieran asistido a escuelas de adultos/as y completaron el nivel medio con posterioridad al año 2000.

1. El escenario macrosocial. La Argentina tras tres décadas de neoliberalismo

Para comenzar, parece conveniente mencionar algunos aspectos relevantes que han caracterizado al escenario económico nacional en el cual se ha desarrollado la vida cotidiana de los sectores sociales más desfavorecidos, durante las tres últimas décadas.

Durante el último cuarto del siglo XX, la Argentina protagonizó un proceso de transformación estructural, dejando atrás la etapa

de industrialización sustitutiva de importaciones. Se fueron sentando las bases para la consolidación de un “modelo de acumulación” (Torrado, 1992), denominado “aperturista” o “neoliberal”, centrado en la valorización financiera como eje rector de la actividad económica. Se trató de una estrategia que representaba los intereses de un número reducido de grupos económicos locales y empresas transnacionales. Los “ganadores” de esta transformación fueron el sector comercial tradicionalmente exportador e importador, aliado al sector financiero y a grandes capitales con peso industrial (en ramas de procesamiento de materias primas y explotación de recursos naturales) (Schorr, 2005: 18-19).

Entre las principales características del modelo aperturista, se destaca un largo y sostenido proceso de desindustrialización: la industria dejó de ser el eje ordenador y el sector de mayor tasa de ganancia de la economía. Vio disminuir su importancia tanto en términos productivos como en términos ocupacionales (Schorr, 2005: 15 y ss.)

Entre los “perdedores” del modelo, se destacan los pequeños y medianos empresarios, así como algunas grandes empresas ligadas a la industria nacional, es decir, aquellos grupos que no estaban vinculados a grupos económicos transnacionales ni al comercio exterior. Además, se encuentra claramente al conjunto de las clases populares. De manera ininterrumpida a lo largo del período señalado, ha tenido lugar una “notable redistribución del ingreso desde el trabajo hacia el capital” (Schorr, 2005: 26).

En la década de 1990, se implementó un programa de reformas estructurales en materia económica y política que vino a profundizar aquellas transformaciones iniciadas en 1976. Entre ellas, debe mencionarse la privatización de las empresas públicas, la desregu-

lación de los mercados y la definitiva apertura comercial y financiera. Se estipuló además, por ley, la paridad cambiaria o “convertibilidad” entre el peso argentino y el dólar estadounidense.

En el campo laboral, los efectos de las políticas neoliberales de los noventa agudizaron la regresividad en materia distributiva. Los niveles de desocupación y subocupación afectaron, en los momentos más álgidos de la crisis en 2001-2002, a una muy elevada proporción de la población económicamente activa¹.

Las consecuencias en términos de polarización social, empobrecimiento de grandes mayorías y concentración de la riqueza en una serie de grupos muy poderosos y minoritarios, configuraron un nuevo tipo de sociedad en la Argentina, que Svampa (2005) ha denominado “sociedad excluyente”. La misma se ha estructurado sobre la base de la cristalización de las desigualdades no sólo económicas, sino también culturales y políticas.

En lo que hace a la dimensión política, el carácter de “excluyente” de las sociedades latinoamericanas se vincula con la noción de ciudadanía plena, dado que se verifica la existencia de ciudadanos que gozan plenamente de sus derechos y otros que no lo hacen: los excluidos o los no ciudadanos (Nun, 2001: 299).

Tras los estallidos sociales sucedidos en diciembre de 2001, en el año 2002 se inició un nuevo período en la historia económica argentina. Como medida más llamativa, se destaca el abandono de la convertibilidad y la instauración de un régimen de dólar alto. La devaluación tuvo, entre otras, dos consecuencias: a) se redujeron inmediatamente los salarios reales y consecuentemente, los costos de producción, y b) se tornaron las exportaciones mucho más competitivas en los mercados internacionales. Además, se incrementó signifi-

cativamente el valor en moneda doméstica de los capitales argentinos fugados al exterior.

Ante la ausencia de una industria nacional desarrollada y sólida, las áreas que rápidamente lograron insertarse en los mercados internacionales han sido la agricultura y la minería. Así dio comienzo a lo que ha sido denominado “modelo agro-minero exportador”.

Los grupos hegemónicos de este nuevo patrón de acumulación han sido los grupos económicos de capital nacional (sobrevivientes de los noventa) e importantes conglomerados, de capitales nacionales y extranjeros, vinculados a la manufactura y a las exportaciones. Los defensores del nuevo modelo destacan que éste promueve la sustitución de bienes importados, los que a partir de la devaluación comenzaron a ser producidos por la industria local, generándose de ese modo nuevos puestos de trabajo. Esto ha sido una verdad a medias, dado que la recuperación de las variables macroeconómicas se produjo en relación a niveles altamente deteriorados como son los que se registraron en plena crisis. La reactivación se asienta sobre la utilización de la capacidad ociosa instalada (Schorr, 2005: 58).

No puede negarse que la producción manufacturera y la ocupación se han incrementado. No obstante, la participación de la clase trabajadora en el producto ha disminuido en términos reales, al comparársela con los niveles alcanzados con anterioridad al modelo aperturista. Así, el salario promedio de un obrero fabril en términos reales era un 20% más bajo que en el período de la convertibilidad, y aproximadamente un 45% más reducido que en los años previos a 1976 (Schorr, 2005: 61).

Dentro de la clase trabajadora, se han observado niveles de heterogeneidad crecientes a lo largo de las últimas tres décadas. Categorías como ocupación/ subocupación/ deso-

cupación; trabajo calificado/ trabajo no calificado; trabajo registrado o “en blanco” / trabajo no registrado o “en negro”; empleo en relación de dependencia/ trabajo por cuenta propia; salario “digno” / salario por debajo de la línea de pobreza, son quizás algunos de los principales ejes diferenciadores.

Entre las políticas sociales de nuevo cuño que comenzaron a implementarse tras los procesos de pauperización producidos por el régimen neoliberal, se destaca la proliferación de programas de contención de la extrema pobreza, a través de la distribución focalizada de “planes sociales”. Ante la emergencia ocupacional (que ha llegado a ser crónica), estos planes de ingreso mínimo fueron creados para otorgar un monto mensual en dinero, exigiendo a los/as beneficiarios/as algún tipo de contraprestación de interés público o social.

Estas profundas transformaciones no podían sino modificar drásticamente la configuración de la cotidianeidad de los grupos sociales excluidos dentro de la sociedad excluyente. Las subjetividades, organizadas antiguamente en torno del mundo del trabajo, se han reorganizado al interior de las clases trabajadoras. En el presente, la inestabilidad de los marcos de referencia conocidos, los cambios permanentes, la falta de previsibilidad del futuro e inclusive, la falta de certezas en torno de las posibilidades de supervivencia, son dimensiones que atraviesan la vida cotidiana de quienes fueron desplazados del bienestar, como se verá en las páginas que siguen.

2. Estrategias desplegadas para la obtención de medios de sobrevivencia

A continuación un plano micro-social de análisis. El ingreso de las mujeres entrevis-

tadas al mercado de trabajo se produjo en la mayoría de los casos en la infancia o adolescencia. Se trata de empleos de muy bajo nivel de calificación y se destacan la venta ambulante y el servicio doméstico.

– Yo empecé a los quince, más o menos. Ahí trabajaba de niñera, cuidaba tres niños y estuve con ese trabajo como un año y medio aproximadamente. A la vez, me ofrecieron atender un negocio, entonces a la mañana cuidaba a los niños y a la tarde atendía. [...] También a era empleada doméstica en el geriátrico. [...] No estuve mucho ahí porque los últimos meses no me estaban pagando, así que abandoné por eso. Y además, era un geriátrico clandestino y no tenían papeles ni nada de eso. Ese, la verdad, fue el peor trabajo que he tenido en mi vida, porque era muy duro. [...] Después de eso me metí a trabajar en la rotisería, los fines de semana, y a la mañana en una empresa de limpieza... (Anahí).

Además de la excesiva duración de la jornada y los bajos salarios, lo que caracteriza a este tipo de empleos es la precariedad de la relación laboral, que se manifiesta bajo una multiplicidad de situaciones cotidianas. Al no mediar contrato alguno, son frecuentes los relatos de empleadas que describen haber sufrido diversos incumplimientos de las obligaciones por parte de los empleadores. Señalan, por ejemplo, que no se les ha pagado el salario que se les prometió, y no cuentan con un respaldo institucional que permita dar curso, de manera ágil y no burocratizada, a sus reclamos. La única solución a la que pueden aspirar, entonces, es la vía judicial. No obstante, se requiere tiempo, dinero, y no existen garantías de lograr el éxito con este tipo de iniciativas, por

eso muchas veces se renuncia de antemano a iniciar acciones legales.

La precarización del empleo hace que la persona trabajadora no se encuentre protegida por ningún sistema de seguridad social, de manera que debe asumir personalmente todos los riesgos derivados del trabajo que realiza.

– Veinticinco años estuve trabajando en el buffet. [...] Entonces en las vacaciones yo dejaba de trabajar, porque teníamos vacaciones de verano. Y día trabajado, día pagado, ¿te imaginás? Enero y febrero yo tenía que buscarme otra cosa. Y conocía ingenieros, arquitectos, y un día me saludan y me dicen: “¿Te gustaría hacer el fino de obra, a vos que te sale tan bien?” Y allá iba yo, con doscientos hombres, a hacer el fino de obra... (Elina).

El trabajo “a destajo”, “al tanto”, “por hora” o “por día” es en muchos casos la única posibilidad laboral que se les presenta a vastos sectores de la población. Llama la atención en el fragmento anterior que la relación laboral de la entrevistada se mantuvo durante veinticinco años, y sin embargo, seguía tratándose de un empleo precario. No tenía estabilidad (“teníamos vacaciones de verano” equivale a decir “nos quedábamos sin trabajo por tres meses”), ni vacaciones pagas, cobertura social o aportes jubilatorios de ningún tipo.

La inestabilidad del empleo se manifiesta drásticamente cuando el/la empleado/a tiene problemas de salud.

–Y la vez que conseguí trabajo, me enfermé, me dio diabetes. Así que lo perdí al trabajo, y me quedé ahí solamente con el Plan...

–¿Te echaron porque no podías ir a trabajar?

—Lo que pasa es que yo no sabía que estaba enferma, yo no me hacía ver, me sentía mal pero no sabía. [...] En un mes bajé doce kilos. Ahí, como me veían mal, los patrones me dejaron sin trabajo. Me dijeron: “No, andá a hacerte ver”... (Soleidad).

Lo que caracteriza la sobrevivencia, en estos grupos sociales que viven en condiciones de marginalidad (Lomnitz, 2006), es la falta de seguridad social y económica. El futuro se torna altamente imprevisible, lo que explica el fuerte anclaje en el presente que se observa en el modo de experimentar la temporalidad en estas poblaciones. “Tanto los trabajadores no calificados como los calificados trabajan a trato o por jornada; no se encuentran adscritos a organizaciones públicas o privadas de ninguna índole. Como, por otra parte, su rol como consumidores es limitado por su bajo nivel de ingresos, y sobre todo por la inestabilidad de sus fuentes de entradas, puede decirse que participan en forma marginal, de la economía industrial dominante” (Lomnitz, 2006: 16).

Esta caracterización de la problemática de la marginalidad (de clara vigencia para el escenario argentino actual) fue presentada por Lomnitz ya a fines de la década de 1960, por lo que no constituye un fenómeno novedoso para América Latina. Los análisis de la autora establecen además que la marginalidad no es un fenómeno pasajero, sino una realidad tristemente estable en las vidas de las poblaciones estudiadas, debido a que el escenario macroeconómico es el que genera las condiciones de existencia descritas.

El tipo de regresividad social que se ha experimentado en las últimas tres décadas en Argentina no puede considerarse un resultado

pasajero o temporal de las políticas neoliberales, ni tampoco un fenómeno imprevisible. Ya los postulados de la teoría de la dependencia, durante los años 60 y 70, habían adelantado claramente que hacia este tipo de sociedad (que hoy se llama excluyente) se dirigía el país si continuaba inserto, como país dependiente, en condiciones económicas globales tan altamente perjudiciales para su economía.

En el caso de las mujeres, al hecho de insertarse en puestos que ofrecen poca estabilidad debe sumarse la cuestión de la dificultad para permanecer en el mercado de trabajo como consecuencia de las “obligaciones” derivadas del matrimonio y la maternidad. Es común que aquellas mujeres de sectores populares que se encuentran empleadas, dejen de hacerlo cuando contraen unión conyugal. A partir de ese momento, comienzan a dedicarse al trabajo doméstico no remunerado, incluyendo la crianza de los hijos y la realización de los quehaceres necesarios para la reproducción de la vida en el hogar. “Aunque el efecto inhibitorio de los hijos sobre la participación en el mercado de trabajo y en la posibilidad de desempeñar mejores empleos se produce en una fase limitada de la vida, su impacto en la posición económica de las mujeres suele ser de más largo plazo” (Aguirre, 2003: 28).

Se considera ahora particularmente el caso de Carmela, quien se encontraba inserta en un puesto relativamente mejor posicionado que el resto de las entrevistadas. Trabajó durante nueve años en la actividad comercial (desde los 16 años), como vendedora, antes de casarse.

—Empecé [a trabajar] cuando dejé cuarto año. [...] Nueve años y medio trabajando en comercio. Primero, en un comercio del centro y después, en una farmacia.

Siempre en la comunicación con la gente.

—¿Te gustaba?

—Sí, sí, sí.

—¿Y por qué dejaste después?

—Y porque me casé y tuve mis hijos... (Carmela)

Como en muchos otros casos de trabajadores que se insertan tempranamente en el comercio, esta entrevistada podría haber hecho carrera, aprendiendo el oficio de las ventas, para alcanzar un nivel de autonomía que le permitiera ser económicamente independiente y tener un ingreso “digno” (por encima de la línea de pobreza, por tomar un parámetro) en el presente. Sin embargo, su historia está signada por su condición de mujer, lo que le condujo —como a muchas otras mujeres en la actualidad— a renunciar a su independencia económica para formar una familia.

El abandono del mercado laboral mientras aún son adolescentes o jóvenes trae aparejada la vulnerabilidad social de las mujeres, dado que pierden la “capacidad de mantener un hogar autónomo”, es decir, de asegurar la sobrevivencia y mantener a sus hijos/as sin depender para ello al ingreso del cónyuge (lo que puede obligarlas a permanecer unidas para evitar carencias económicas) (Aguirre, 2003: 16).

Cuando por alguna razón, los varones dejan de cumplir su rol proveedor, quienes vivían hasta ese momento gracias a sus aportes se ven expuestas a caer en la pobreza.

—¿Y económicamente, vos dependías de él cuando estabas casada?

—Sí.

—¿No trabajabas?

—Yo trabajaba en las temporadas [de cosecha], siempre me gustó trabajar en las

temporadas, ¿viste? porque se ganaba bien. Pero ése era el miedo también cuando me separé, eran cuatro niños y ¿qué iba a hacer yo? [...]

—¿Y él dónde trabajaba?

—Trabajaba en una fábrica.

—¿Alguna vez te pasó algo de plata para los chicos?

—No. [...] Fui al Juez para que me diera la cuota alimentaria y la plata del salario familiar, porque el salario se lo daba el gobierno, no era plata que ganara él. Bueno, cuando le llegó la citación del Juez, agarró y renunció al trabajo. Nunca más supe de él.

—¿Y nunca más te pasó nada, empezó a trabajar en negro?

—Sí, aparte él se fue a vivir al distrito de 3 de Mayo, allá lejisimos. Yo no sabía dónde estaba, y el juez me decía: “Bueno, vos buscáme la dirección para ir nosotros a emplazarlo, meterlo preso, pero si no tenés la dirección...” ¿Y yo qué sabía? ¡Si vivía en el medio del campo! (Luz)

Se observa la falta de protección jurídica que experimentan las mujeres y sus grupos familiares ante el incumplimiento por parte del varón de las responsabilidades de brindar manutención a los hijos e hijas luego de la separación conyugal. Así, la ruptura de la relación no sólo constituye una situación dolorosa en términos emocionales, sino que además está acompañada de la pérdida drástica de recursos para la subsistencia. En ese escenario, muchas mujeres se ven obligadas a insertarse en el mercado de trabajo. En los sectores populares, esta inserción se produce en los escalones más bajos de la estructura ocupacional.

—¿Cómo hiciste, después de separarte, para sobrevivir?

—¡Me las rebuscaba!

—¿Saliste a buscar trabajo?

—Claro, sí, salí a buscar trabajo, aparte ahí nomás conseguí acá enfrente el tema de la leche.

—¿Te la entregaban?

—Claro, en el Muncentro, me daban la caja de mercadería. Por ahí mi papá venía y me traía verdura, o cosas así. Nunca me quedé quieta, hacía cualquier cosa para salir a vender. Después, conocí a una señora y nos pusimos a vender ropa, ropa usada. Pedía a mi prima, a otra gente, y la vendía. Y con eso tiraba. Nunca me quedé esperando que alguien me trajera, trataba de no molestarlos mucho a mis viejos.

—¿Tu papá tenía verdulería por eso te traía verdura?

—No, no, no. Porque mi mamá por ahí se iba a los trueques, ¿viste que estaban los trueques? En eso también me las rebuscaba, en los trueques. Hacía pan, más que todo, el pan que en los trueques salía mucho. [...] Ah, y siempre vendí cubitos. Juguitos congelados. Los hacía con gelatina. Vendía un montón, en agosto ya empezaba a vender... Las bolsitas las compraba yo, y hacía la gelatina, [...] y los vendía a diez centavos, a quince... (Soledad).

Las estrategias de subsistencia de las que hablan las entrevistadas procuran lograr tanto la minimización de los egresos como el aumento de los ingresos. En esta última dirección, se destacan una variedad de actividades como la venta ambulante de diverso tipo de

productos, la participación en clubes de trueque (mecanismo muy difundido a comienzos de la década de 2000), la instalación de comercios en la propia vivienda (generalmente dedicados a la venta de comestibles), hasta la organización de eventos como rifas o bingos. Todas estas prácticas tienen como finalidad generar ingresos o incrementar los ya existentes. En algunos casos, se buscan personas “aliadas” o socias, con quienes desarrollar la estrategia planeada, con vistas a incrementar los capitales a invertir.

En relación a los clubes de trueque, debe mencionarse que se trató de un fenómeno de dimensiones masivas, que surgió como respuesta al contexto de depresión económica, falta de dinero circulante, desocupación y pobreza². Bogani y Parysow (2005) han mostrado que la participación en las redes del trueque llegó a constituir un aspecto central de la estrategia de vida de vastos sectores de la población. De hecho, el consumo de miles de familias participantes se incrementó notablemente, posibilitando el acceso a bienes y servicios a los que no se podría acceder de otra manera.

Los límites del fenómeno estuvieron dados por el crecimiento incontrolable de las distintas redes, derivado de la participación masiva, así como por las dificultades para controlar la emisión de los “créditos” (la moneda social) o su falsificación, que terminaron en una fuerte inflación y en la crisis de todo el sistema de intercambio a nivel nacional.

Un mecanismo de obtención de bienes de subsistencia que suele ser desplegado de manera concomitante a los anteriores, es el aprovechamiento de las ayudas sociales que ofrecen las instituciones estatales. Por esa vía, se accede a la obtención de bolsones de mercadería, cajas de leche o a planes sociales que brindan distintos tipos de prestaciones

monetarias, a cambio de contraprestaciones diversas.

Esta estrategia ha estado presente particularmente entre aquellas mujeres entrevistadas que habían resultado beneficiarias del Plan Jefas de Hogar (PJH) en Mendoza. Este beneficio da cuenta de la condición de pobreza en que se encuentran sumidos los hogares a los que ellas pertenecen (puesto que, para ingresar a este tipo de programas de ingreso, se debe acreditar que se es pobre y desocupado/a ante los organismos del Estado).

En la Argentina, el origen de los programas de ingreso mínimo (habitualmente denominados “planes sociales”) se remonta a 1996, según Svampa, cuando el Estado nacional decidió comenzar a paliar los conflictos sociales derivados de la creciente ola de despidos lanzando el Plan Trabajar. El mismo fue reformulado en 2002, transformándose en el Plan Jefes y Jefas de Hogar. Este programa se ha caracterizado por su “marcada ambigüedad al no constituir ni un seguro de desempleo, ni una política asistencial, ni una política de reinserción laboral, sino todas esas características a la vez” (Svampa, 2005: 244).

En la provincia de Mendoza, el PJH creado en el año 2000 tuvo, entre otras, dos características distintivas. En primer término, estaba dirigido específicamente a mujeres, en base a lo que desde los lineamientos del programa se ha pretendido un componente de género. “Diversas investigaciones han constatado que la relación entre género y pobreza constituye un fenómeno multiplicador y transmisor de las oportunidades de vida precarias de los niños y niñas que viven en esos hogares. Esto las convierte [a las mujeres] en un grupo prioritario de focalización de la política social” (Ministerio de Desarrollo Social y Salud, s/f, 54).

En el fragmento se observa, no obstante, que son más bien los niños y niñas que viven en hogares pobres quienes deben ser protegidos desde la óptica de la política social, más que las mujeres-madres que los tienen a cargo. Pero como “buenas administradoras” que el Estado las considera, son las beneficiarias inmediatas del programa.³

En los años posteriores, se crearon en la provincia otros programas de ingreso mínimo, con una variedad de modalidades en lo que respecta a población beneficiaria, tipo de contraprestación exigida y monto de las prestaciones brindadas. Entre las entrevistadas, quienes habían ingresado en el año 2000 al PJH, continuaban percibiendo algún tipo de plan social en 2006 y 2007. Esto se debe a que sus situaciones económicas –lejos de haber mejorado luego de haber completado el nivel secundario– habían empeorado en términos de salarios reales percibidos como consecuencia de la inflación.

La mayoría de las entrevistadas que asistieron a C.E.N.S. comunes (no dependientes del PJH), en cambio, no ha solicitado nunca el cobro de planes sociales. Esto se vincula al hecho de que disfrutaban de relativamente mejores condiciones de vida que el resto de las mujeres que integran la muestra, o al menos no han visto tan drásticamente amenazada la supervivencia al interior de sus hogares. En algunas oportunidades, durante las entrevistas, aparecieron representaciones que cuestionaban la existencia de estos programas. Parece conveniente retomar estas nociones, puesto que ilustran ideas muy difundidas a nivel social.

–Es lo que yo no entendía de la gente que tenía plan social ¡pobre gente! ¿No? Pero fijáte vos, yo comparo: y les falta lo otro, una buena disposición, una buena educa-

ción, una postura. De hecho, fijáte vos, la gente ésa que pide los planes sociales van al choque, a la discriminación, en el sentido de que ellos creen que ellos son menos y los otros son más, y odian. El odio, la bronca, todo eso. [...] En la escuela, yo tuve una compañera que tenía plan social y justamente era siempre así, ¿viste? Tenía eso... (Elina).

Haciéndose eco de visiones de clase media, las palabras de Elina plantean algunos de los conflictos inherentes a los programas de ingreso mínimo implementados en Argentina. Se trata de políticas focalizadas, dirigidas a una porción pauperizada de la población. En una importante proporción de casos, no tiene lugar contraprestación alguna por parte de los grupos beneficiarios. Tampoco hay capacitación para el trabajo, ni existen mecanismos vinculados a esos programas que generen trabajo genuino o trabajo productivo. En consecuencia, son políticas que no gozan de un consenso social muy difundido, especialmente entre los miembros de las clases que no acceden a este tipo de beneficios.

Así, puede concluirse que una manera posible de construir consenso en torno de la política social (en términos generales) viene de la mano de la universalización de los beneficios. El hecho de que los intereses de diversos sectores sociales confluyan en políticas específicas seguramente contribuye a desconstruir a críticos y detractores. La universalización también asegura una eliminación o disminución de los costos administrativos vinculados a la selección y seguimiento de beneficiarios (en lo que hace al control de los niveles de necesidad experimentados por las poblaciones para mantener el beneficio). Si tales controles se eliminan y los costos de gestión

disminuyen, se liberan más fondos para reasignar a la política social.

Finalmente, el último de los mecanismos de obtención de medios de subsistencia que interesa analizar aquí es el ejercicio de la prostitución. En los sectores populares, cuando las oportunidades de garantizar la sobrevivencia son mínimas, puede suceder que la prostitución sea la única alternativa existente. La situación se agudiza, eso está claro, en aquellos casos en que la necesidad de obtener ingresos es apremiante.

Al abordar el tema con las entrevistadas que integraban la muestra, se explayaron acerca de las oportunidades que se le presentaron de dedicarse a lo que alguna llamó el “rubro más viejo” y las razones por las que lo descartaron. Entre ellas, se destacan los aspectos degradantes de la actividad vinculados al hecho de tener relaciones sexuales contrarias a sus deseos; y los peligros a los que se someten las mujeres en situación de prostitución como el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o la exposición a la violencia en cualquiera de sus formas.

Algunas señalaron que nunca han necesitado dinero con suma urgencia, de manera imprescindible, lo que ocurriría si sus vidas o las de sus hijos/as estuvieran en peligro. Cuando Graciela, por ejemplo, afirma “nunca me hizo falta”, quiere decir que sólo ante una necesidad imperiosa, urgente e insalvable de otro modo, ésa sería una posibilidad a considerar. Pero, definitivamente, no es una tarea que parezca aceptable para ella, incluso ante las visibles necesidades económicas que ha sufrido y la posibilidad de obtener plata de manera inmediata que la actividad ofrece.

La prostitución se organiza y se ejerce en ámbitos diferentes y separados de los ámbitos en los que se desarrolla la vida cotidiana,

como el barrio o la escuela. Es algo de lo que en la escuela no se habla, han señalado las entrevistadas. Los espacios sociales habituales aparecen como ámbitos “protegidos” de este tipo de prácticas, socialmente desprestigiadas y repudiadas.

La consideración negativa que comúnmente se tiene sobre el trabajo sexual ha sido analizada bajo la categoría de “estigma” por Meccia y otros (2005). El estigma es una señal, un signo o un símbolo, que identifica a alguien y le confiere un *status* social “indeseable” ante los demás. Cuando los atributos asociados al estigma son poco visibles, es frecuente que sus portadores/as desplieguen prácticas de ocultamiento para evitar la desacreditación social. Así, las mujeres que asisten a la escuela y se encuentran en situación de prostitución procuran ocultarlo, con vistas a mantener diferenciadas las esferas de la obtención de recursos y el resto de las dimensiones de la cotidianidad.

3. El “no trabajo”. La producción de bienestar al interior del hogar

Así como se observa que muchas mujeres dejaron de trabajar en relación de dependencia al contraer la primera unión o matrimonio, se verifica también que en el marco de una división socio-sexual del trabajo tradicional, muchas de ellas se han dedicado desde la infancia o adolescencia a la realización de trabajo doméstico no remunerado exclusivamente. En el resto de los casos, se pudo verificar que, aunque estén empleadas fuera del hogar, las entrevistadas son al mismo tiempo las principales responsables de las labores domésticas.

En nuestras sociedades, esta actividad habitualmente no es concebida como trabajo. Sin embargo, los estudios de género han permitido dilucidar que mediante el trabajo do-

méstico se realiza un aporte no sólo significativo sino imprescindible para la producción y reproducción de la vida de las comunidades humanas. Ninguna unidad doméstica podría sobrevivir, literalmente, si al interior del hogar no se llevarán a cabo tareas como cocinar alimentos, mantener la vivienda en condiciones de higiene, hacer compras, pagar impuestos y servicios, lavar ropa, por sólo mencionar algunas. Es frecuente que tales actividades sean consideradas “reproductivas”, aunque bien pueden ser tenidas también como “productivas” en tanto son generadoras de bienes y servicios que los miembros del hogar consumen para la satisfacción de sus necesidades elementales.

A lo anterior debe sumarse un tipo especial de labor, que las corrientes feministas anglosajonas han denominado “care”. “Sin por ello proponer una definición, diremos que el *care* designa la ayuda a un niño o a una persona adulta o anciana dependiente en su vida cotidiana o en su bienestar. Abarca al mismo tiempo la responsabilidad material (el trabajo), económica (el coste) y psicológica (el lado afectivo, la emoción, los sentimientos). Puede realizarlo un miembro voluntario de la familia, o una persona remunerada, dentro o fuera de ella” (Letablier, 2007: 66).

Las perspectivas más tradicionalistas afirman que las mujeres cuentan con una especie de altruismo natural para llevar a cabo este tipo de cuidados sobre los demás. Identifican el ser mujer con el contar con una innata vocación de servicio, no sólo hacia los propios hijos/as sino en general hacia cualquier miembro del grupo que lo requiera. La perspectiva feminista ha contribuido a develar las normas socio-sexuales en función de las cuales se trata de labores asignadas forzosamente a las mujeres (aunque en apariencia se asuman de modo voluntario). Las disposiciones a desem-

peñar el rol de mujer-madre-cuidadora se aprenden desde la infancia. El ejercicio de los roles sexuales prescriptos exige a las mujeres sacrificar la satisfacción de sus propias necesidades y deseos, para ponerse al servicio de los demás. “El rol femenino es identificado subjetivamente con la capacidad para sufrir: ese rol se encuentra implícito en las actitudes que se desarrollan en el hogar desde la más temprana edad. Las niñas aceptan servir a sus padres sin ser consentidas: en cambio, participan en los mimos que se prodigan a sus hermanitos varones y consienten todos sus caprichos” (Lomnitz, 2006: 101). Ir en contra de este tipo de prescripciones sociales acarrea sanciones sociales, a lo que debe agregarse sentimientos de culpa que son el resultado de la internalización de las normas.

Contar con mujeres en la familia –tal como revelan todos los testimonios de entrevistadas para la investigación, que debieron recurrir al trabajo de sus madres, hermanas o hijas mientras ellas estaban estudiando– es una especie de “seguro social” en todas las clases sociales. Pero, a falta de otros recursos, se vuelve especialmente necesario en los sectores más desfavorecidos.

Existe un sinnúmero de eventos de la vida cotidiana que pueden afectar el bienestar de las personas, y surgen de modo más o menos imprevisible. Para su satisfacción, se requiere destinar una serie de recursos “extras”. Tómese como ejemplo el surgimiento de la enfermedad grave de un hijo/a. Se necesitará que alguien le prodigue cuidados mientras está impedido de manejarse por sus propios medios. Pero además, se requerirá de alguna persona responsable que realice trámites en el hospital o en la obra social, que “averigüe” o busque información acerca de centros de tratamiento alternativos, que compre medicamentos.

Entre las clases medias y altas, esas labores pueden ser realizadas por mujeres de la familia, aunque si ellas no están en condiciones de hacerlo, existe la posibilidad de tercerizarlas, contratando a otras personas para que se encarguen de esos esfuerzos. Pero quienes viven en condiciones de pobreza satisfacen muy limitadamente sus necesidades básicas y no tienen recursos “extras” para costear ese tipo de tareas. Son fundamentalmente mujeres quienes se encargan entonces de hacer frente a las “emergencias” y a aquellas obligaciones de las cuales es imposible desentenderse.

Tómese como ejemplo el caso de uno de los hijos de Mariana, a quien el Estado provincial había compelido a realizar un tratamiento de rehabilitación por consumo de drogas, para evitar el procesamiento judicial. Dicho tratamiento exigía la participación de una persona adulta que se hiciera responsable del menor, y fue la madre del chico –como no cabía esperar de otra forma– la que tuvo que asumir esta responsabilidad.

Si bien esos imponderables de la vida cotidiana no son nunca los mismos para todas las familias en términos reales, sin dudas puede afirmarse que la totalidad de los hogares están expuestos a sufrirlos en algún momento. La presencia de mujeres es una especie de garantía de que, ante tales circunstancias, se dará satisfacción a las necesidades que surjan. Como consecuencia de lo dicho hasta aquí, entre las mujeres de sectores populares se verifica una sobrecarga de trabajo y de responsabilidades, que Durán (2007) ha definido como “expropiación de tiempo”.

Las mujeres entrevistadas están expropiadas de tiempo porque además de los trabajos de cuidado y atención del resto de los miembros del grupo, realizan en sus hogares labores como acarrear agua o leña (recorriendo a veces distancias significativas), buscar

mercadería u otro tipo de bienes en lugares distantes, con el objeto de incrementar las disponibilidades del grupo, y suplir la falta de servicios imprescindibles (como el agua potable). En general, se procura evitar el uso del transporte público para trasladarse y en cambio se camina o se anda en bicicleta. Todas estas estrategias contribuyen a disminuir la disponibilidad de tiempo libre.

El hecho de no contar con ciertas tecnologías de uso doméstico (como por ejemplo, un lavarropas o una cocina) es suplido con horas de trabajo femenino, llevando a cabo tareas como prender fuego para cocinar, o lavar ropa a mano, entre otras. La elaboración de productos de alimentación caseros -como el pan- también es una estrategia tendiente a disminuir los egresos del grupo.

Sumado a ello, en los sectores populares las bajas remuneraciones percibidas obligan a emplearse en tantas actividades remuneradas como sea posible, sacrificando todo tiempo de descanso, para aumentar los ingresos insuficientes. Así, la problemática de la expropiación de tiempo denota que hay personas que sufren de una falta absoluta de tiempo libre, cuya jornada se halla abarrotada de actividades relacionadas con la sobrevivencia.

4. Comentarios finales. El aporte de las mujeres a la economía familiar luego de haber egresado del nivel medio

Los resultados presentados forman parte de una investigación mayor, en la cual se analizaron los aportes de las mujeres a las estrategias de reproducción social de un grupo de familias de sectores populares mendocinos.

Lamentablemente, el trabajo de campo arroja como resultado que la mayoría de las

entrevistadas se desempeña en puestos de muy bajo nivel de calificación. Ello pone de manifiesto que la problemática del desempleo o el empleo precario no encuentra resolución, en el escenario argentino actual, en la capacitación de quienes buscan trabajo. Es decir, no puede soslayarse que efectivamente tiene lugar un relegamiento progresivo de la mano de obra no calificada. Pero a lo dicho, debe sumarse la insuficiente demanda de trabajadores/as calificados/as por parte de la estructura ocupacional. Todo ello normaliza un escenario general de falta de certezas, e incluso, de expectativas de mejoría para quienes efectivamente han recorrido trayectos de capacitación o escolarización.

En términos generales, las sociedades capitalistas se caracterizan en el presente por una falta de “*trabajo asalariado, estable y bien remunerado*” como perspectiva real y alcanzable por una gran parte de la mano de obra disponible”, tal como ha sido planteado por Nun (2001: 274). Pero además, el hecho de ser mujeres y pobres constituyen condiciones que dificultan el ingreso al trabajo remunerado calificado, tal como han constatado otras investigaciones en América Latina (Aguirre, 2003: 25), poniendo de manifiesto que existe una serie de factores que condicionan las posibilidades de acceder al empleo además del nivel educativo alcanzado. Efectivamente, “el ingreso al mercado de trabajo de las madres de familia que por concentrarse en el trabajo doméstico y el cuidado de niños de corta edad estaban en la inactividad [...] tiene menos éxito cuando la tasa de desocupación es muy elevada” ha señalado Neffa (2005: 33), que es lo que sucede en el caso argentino.

A todo lo dicho debe agregarse, desde una perspectiva de género, que en un sistema basado en la división sexuada del trabajo, las mujeres se ven afectadas por severas desven-

tajas para competir con los varones por los mismos puestos. Muchas empresas privadas, por ejemplo, limitan la contratación de mujeres casadas para no tener que enfrentar licencias por maternidad, o por cuidado de niños/as o enfermos. La escuela, definitivamente, ha dejado de ser un mecanismo de movilidad social ascendente, porque es el conjunto de la sociedad el que experimenta un proceso de descenso y empobrecimiento.

Notas

1. De acuerdo con los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, la desocupación en la onda de octubre de 2001 era del 18,3% y la subocupación ascendía al 16,4% de la población de los aglomerados urbanos relevados. Estas cifras ascienden en el lapso de los seis meses siguientes al 21,4% y 18,5% respectivamente, para el relevamiento realizado en mayo de 2002 (Nochteff y Lascano, 2002). La falta de empleo, que sufría alrededor del 40% de la población económicamente activa, se relacionaba directamente con la situación de pobreza por ingresos, que llegó a afectar a más del 50% de la población argentina.
2. Las redes de trueque se extendieron por veinte provincias y se estimaba que podían llegar a involucrar a más de un millón de argentinos, según afirma el Diario Clarín del 9 de diciembre de 2001.
3. Para un abordaje crítico de la “perspectiva de género” presente en el diseño del programa desde un enfoque feminista, véase Anzorena (2008).

Bibliografía citada

- Aguirre, Rosario (2003). **Género, ciudadanía social y trabajo**. Montevideo: Universidad de la República. Doble Clic Editoras.
- Anzorena, Claudia (2008). **Mujeres, políticas sociales y educación: tensiones entre**

límites y posibilidades. El Plan Jefas de Hogar Desocupadas (Mendoza, 2000 a 2006). Tesis de Maestría, Maestría en Política y Gestión de la Educación, Universidad Nacional de Luján, mimeo.

- Bogani, Esteban y Parysow, Javier (2005). Perspectivas de desarrollo económico y social para las mujeres pobres y empobrecidas de los clubes del trueque: el caso de la Bernalesa. En Mallimaci, Fortunato y Salvia, Agustín (coord.). **Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados**: Pp. 151-173. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires - Instituto Gino Germani. Biblos.
- Bourdieu, Pierre (2002). **Estrategias de reproducción y modos de dominación**. En Colección Pedagógica Universitaria Nro. 37-38. Enero-Junio/Julio-Diciembre. Xalapa, Veracruz, México: Instituto de Investigaciones en Educación. Universidad Veracruzana. Visitado con fecha: 24/04/2007. Disponible en el sitio: http://www.uv.mx/iie/coleccion/N_3738/C%20Bourdieu%20estrategias%20dominacion.pdf
- Diario Clarín (2001). **Se duplicó la cantidad de gente que recurre al sistema del trueque**. 9 de diciembre, Buenos Aires, Argentina.
- Durán, María Ángeles (2007). **El valor del tiempo. ¿Cuántas horas te faltan al día?** Madrid: Espasa Calpe.
- Letablier, Marie-Thérèse (2007). El trabajo de «cuidados» y su conceptualización en Europa. En Carlos Prieto (ed.) **Trabajo, género y tiempo social**. Madrid: Editorial Complutense.
- Lomnitz, Larissa A. de (2006). **Cómo sobreviven los marginados** [1975]. México: Siglo XXI.

- Meccia, Ernesto y otros (2005) Trabajo sexual: estigma e implicancias relacionales. Trayectorias de vulnerabilidad de mujeres y travestis en situación de prostitución en el sur del Gran Buenos Aires. En Mallimaci, Fortunato y Salvia, Agustín (coord.) **Los nuevos rostros de la marginalidad. La supervivencia de los desplazados**. Buenos Aires: Instituto Gino Germani. Biblos.
- Ministerio de Desarrollo Social y Salud (s/f). **Plan Jefas de Hogar**. Mendoza: Gobierno de Mendoza.
- Neffa, Julio (2005). **Actividad, empleo y desempleo: conceptos y definiciones**. Buenos Aires: CEIL- PIETTE CONI-CET. Miño y Dávila.
- Nochteff, Hugo y Lascano, Verónica (2002). **Cuadros y gráficos elaborados en base a la EPH, INDEC, Área de Economía y Tecnología**. FLACSO. Buenos Aires: mimeo.
- Nun, José (2001). 1999, Nueva visita a la teoría de la masa marginal. En **Marginalidad y exclusión social**. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Schorr, Martín (2005). **Modelo nacional industrial. Límites y posibilidades**. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Svampa, Maristella (2005). **La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo**. Buenos Aires: Taurus.
- Torrado, Susana (1992). **Estructura social de la Argentina: 1945-1983**. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.